

**SENTENCIA DEFINITIVA. EN GUAYMAS, SONORA, A
DOS MIL VEINTICUATRO.**

VISTOS para resolver en definitiva los autos originales del expediente número **896/2023**, relativo al juicio **ejecutivo mercantil**, promovido por _____

por conducto de sus endosatarios en procuración (_____, y/o _____), en contra de _____, y;

RESULTANDO

1o. Por escrito de diez de julio de dos mil veintitrés presentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, compareció _____ —por conducto de sus endosatarios en procuración _____ y/o _____, a demandar en la **vía ejecutiva mercantil** —acción cambiaria directa— a _____, el cumplimiento de las prestaciones señaladas con los inicios A), B) y C), precisadas en su escrito inicial de demanda.

Exponiendo para ello una serie de manifestaciones fácticas y jurídicas que estimó aplicables al caso, las cuales en este apartado se tienen por reproducidas íntegramente de conformidad con el principio de economía procesal.

2o. El de julio de dos mil veintitrés se emitió el correspondiente auto de exequendo.

3o. El [] de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento al demandado.

4o. El día 1 de agosto de dos mil veintitrés compareció el demandado produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra haciendo valer las defensas y excepciones que estimó aplicables y procedentes al caso que se resuelve.

5o. El _____ de septiembre de dos mil veintitrés se fijó la litis del presente juicio, y se ordenó la apertura del periodo de pruebas.

6o. El . de enero de dos mil veinticuatro se abrió el periodo de alegatos por el término de dos días comunes a las partes, advirtiéndose que ninguno de los litigantes hizo manifestaciones al respecto.

7o. Finalmente, el _____ de febrero de dos mil veinticuatro se citó a las partes a oír sentencia definitiva, la que hoy se dicta en los términos siguientes:

CONSIDERANDO

I. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos del artículo 104 (fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la jurisdicción concurrente, la cual se determinó a elección de la parte actora, en favor del tribunal del orden común, con relación a los diversos 1090, 1092, 1094 (fracciones I, II y III) del Código de Comercio; 55 (fracción VI), 56 (fracción I) y 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora.

Lo anterior, al someterse tácitamente las partes a la jurisdicción de este tribunal, el demandante —por el hecho de ocurrir y entablar su demanda ante este Juzgado— y el demandado por producir contestación a la demanda —y no oponer excepción de incompetencia alguna—.

II. Vía.

En términos del artículo 1391 (fracción IV) del Código de Comercio, la vía ejecutiva mercantil elegida por la parte actora es la correcta, toda vez que el documento base de la acción lo es un título de crédito (pagaré), el cual reúne los requisitos que prevé el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por ende trae aparejada ejecución.

III. Relación jurídico procesal.

La relación jurídica-procesal quedó debidamente integrada al emplazarse al demandado con las formalidades y requisitos que exigen los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio, en relación con el diverso 327 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por cuya eficacia, compareció a producir contestación a la demanda incoada en su contra.

IV. Legitimación en el proceso y en la causa.

En el proceso:

La parte actora material se legitimó procesalmente al comparecer por conducto de y/c , quienes justificaron —con el endoso del documento base de la acción, el cual reúne (endoso) los requisitos previstos por el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito— ser sus endosatarios en procuración y, por tanto, contar con facultades para apersonarse en el presente juicio conjuntamente o separadamente y en representación de la parte actora.

En tanto el demandado se legitimó debidamente en el proceso, en términos del artículo 1056 del Código de Comercio al ser persona física, que compareció a juicio por su propio derecho, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos civiles —pues no se alegó ni mucho menos se demostró lo contrario—.

En la causa:

Del documento base de la acción se desprende —entre otros aspectos— que la parte actora es el beneficiario del pagaré, en tanto que el demandado es el suscriptor u obligado.

De manera que la demanda se intentó por quien aparece con derecho a ello y en contra de quién debió ser intentada —lo anterior sin prejuzgar sobre el fondo del asunto—.

V. Igualdad y oportunidad probatoria.

En términos de los artículos 1194 y 1199 del Código de Comercio, los contendientes gozaron de la misma igualdad y oportunidad probatoria, pues una vez que se aperturó la dilación probatoria estuvieron en aptitud de ofrecer los medios de convicción que estimaron conducentes para la demostración de sus respectivas pretensiones.

VI. Litis.

La litis del presente juicio se fijó, de conformidad con el artículo 1401 del Código de Comercio, en relación con el diverso 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles —supletorio del Código de Comercio—, con el escrito inicial de demanda y el de contestación a la demanda.

VII. En la especie no se opusieron ni se desprende que exista cosa juzgada, litispendencia, caducidad de la acción o de la instancia. Por lo que habiendo quedado satisfechos todos y cada uno de los presupuestos procesales para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, se procede a resolver la presente controversia.

VIII. Análisis de fondo.

Es menester indicar que independientemente que el demandado haya producido contestación a la demanda, es imperativo para la parte actora demostrar los elementos constitutivos de la acción ejercitada, y también obligación de este Juzgador analizarlos oficiosamente, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los diversos 14, 260 y 337 del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora –de aplicación supletoria al Código de Comercio ¹–.

En ese sentido, en el particular se tiene que la parte actora fundó su derecho en un título de crédito (pagaré) el cual, de conformidad con los artículos 1391 (fracción IV) del Código de Comercio, y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, constituye prueba preconstituida de la acción cambiaria ejercitada por el importe de su suerte principal y demás accesorios legales, sin necesidad de reconocimiento de firma por parte del deudor, lo que se dice con fundamento en el artículo 167 (primer párrafo) de la precitada Ley mercantil.

De manera que la dilación probatoria en este tipo de juicios se abre únicamente para que la parte demandada demuestre sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción.

Determinación que se sustenta en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

“TÍTULOS EJECUTIVOS. Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación probatoria que en éste se concede es para que la parte demandada justifique sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción.” (Quinta época. Tercera Sala. Tesis **Jurisprudencial** 415. Apéndice 2000. Tomo IV. Civil. Página 349. Registro 913357).

En ese sentido es oportuno abordar en este apartado las excepciones que hizo valer el demandado _____, mismas que denominó:

“Consistente en no haber sido el demandado quien firmó el documento.”

“De alteración y falsificación del contenido y texto de pagaré.”

“Fundada en la omisión de los requisitos y menciones que debe contener el título de crédito.”

“De la falta de legitimación tanto activa como pasiva.”

“Innominada.”

Las aludidas excepciones las hizo consistir en lo que se puede sintetizar de la manera siguiente:

- La existencia de una duda de que la firma que aparece en el documento base de la acción haya sido puesta de su puño y letra, pues está casi seguro de que no firmó el pagaré.
- La alteración o falsificación del contenido del pagaré base de la acción por adición por parte del actor en perjuicio del demandado, pues claramente se

¹ Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro: ***“ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.”***. Registro 1012743.

adicionaron los requisitos que debe de llevar el documento para poder ser reclamado legal y judicialmente.

- Que los requisitos y cuerpo del pagaré fueron inventados y creados por la actora ya que todos y cada uno de los espacios del texto del pagaré reclamado fueron llenados unilateral y dolosamente por la actora tratando de aprovecharlo en su beneficio para obtener un ingreso o lucro al que no tiene derecho.
- La falta de legitimación porque al no haberse comprometido cambiariamente con la actora en ninguno de los términos reclamados por la misma, no puede existir entonces obligación de su persona para el pago de las cantidades reclamadas.
- Que tuvo tratos comerciales con el demandante por el lapso de dos años aproximadamente a principios del dos mil veinte hasta principios del dos mil veintidós ello en relación a préstamos y créditos personales que le proporcionaba el actor, pero que él recuerda que le fueron pagados o cubiertos todos ellos o cualquier otra cantidad que se hubiera comprometido a pagar.
- Que al momento de otorgarle cada cantidad el actor le hacía firmar un pagaré en blanco a fin de asegurarse de que se le pagaría lo prestado, y por eso tiene muchas dudas de haber firmado de su puño y letra el pagaré que se le viene reclamando y, por eso, está casi seguro que la firma que aparece en el pagaré no fue puesta de su puño y letra.
- Que de lo que sí tiene plena y completa seguridad es que en ningún momento se llegó a adquirir un adeudo por la cantidad reclamada, razón por la cual aduce no le adeuda en los términos y condiciones que parece en el pagaré, pues aún cuando haya sido firmado por él el pagaré fue llenado con posterioridad por adición, llenado todas sus condiciones y requisitos en momentos y tiempos diferentes y diversos.

Las mencionadas excepciones se analizarán de manera conjunta, debido a que la naturaleza de las mismas así lo permiten, en virtud que las alegaciones en ellas efectuadas se ven vinculadas entre sí, sin que ello cause perjuicio a quien las invocó, ya que no existe una forma o sistema técnico jurídico para el estudio de las mismas, por lo que debe entenderse que esta juzgadora tiene facultades para hacerlo, particularmente una por una o en conjunto, pues lo que interesa es que se analicen todas y cada una de las excepciones opuestas.

Las excepciones y defensas que se analizan son **infundadas**. Se explica:

En principio, el demandado no contó con medios de prueba fehacientes con los cuales acreditar sus excepciones y desvirtuar la fuerza probatoria con que cuenta el pagaré base de la acción; ya que basó su defensa en cuanto a que el pagaré lo firmó en blanco y que fue llenado con posterioridad en todos sus rubros en su contenido.

No obstante, si afirmó que no contenía la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, como lo es la cantidad a pagar, se hacía necesario que lo acreditara en juicio con medios de prueba suficientes para desvirtuar la fuerza demostrativa con que cuenta el pagaré, a manera de ejemplo con la intervención de peritos en la materia correspondiente a fin de demostrar las defensas y excepciones planteadas —basadas en que firmó en blanco el pagaré base de la acción y fue llenado con posterioridad en todos sus rubros—.

Lo que se dice con la tesis aislada de rubro y texto siguiente:

“PRUEBA PERICIAL. LA OFRECIDA EN GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA SI RESULTA EFICAZ PARA DEMOSTRAR NO SÓLO LA ANTIGÜEDAD DE LAS TINTAS CON LAS QUE SE LLENÓ UN TÍTULO DE CRÉDITO, SINO TAMBIÉN, SI ALGUNOS DE LOS DATOS DE ÉSTE SE REDACTARON EN MOMENTOS O FECHAS DIFERENTES. La grafoscopia y la documentoscopia constituyen disciplinas que deben ubicarse dentro de las ciencias experimentales, específicamente, en las forenses o pertenecientes a la criminalística, ya que tienen, entre otros objetivos, el de llevar a cabo el análisis integral de cualquier clase de documentos con la finalidad de determinar tanto su autoría, como la naturaleza o constitución del material utilizado en su elaboración. Ahora bien, si quien ha de dictaminar sobre aquellas materias acreditó haber obtenido certificado en el conocimiento del campo de la criminalística y técnicas de análisis de documentos falsos, ello supone que adquirió conocimientos de distintas áreas de índole científico, entre ellas, la física y la química, ya que son estas disciplinas las que habrá de emplear para poder determinar, por ejemplo, la fuerza empleada al escribir, el tipo de tinta que se utilizó, la antigüedad de esta última, entre otras cuestiones, para lo cual tendrá que hacer uso de los métodos y técnicas inherentes a las indicadas ciencias, como son, el empleo de materiales químicos y sus reacciones en el documento. Por tanto, la prueba pericial en grafoscopia y documentoscopia si resulta eficaz para demostrar en juicio no sólo la antigüedad de las tintas con las que se llenó un título de crédito, sino también, si algunos datos de éste se redactaron en momentos o fechas diferentes, toda vez que si el perito, durante su formación, obtuvo conocimientos en distintas áreas de carácter científico, es lógico que al momento de dictaminar haga uso de los métodos y técnicas pertenecientes a esas ciencias o disciplinas, al margen de que sean distintas de aquellas sobre las cuales se propuso la prueba pericial.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Agosto de 2007. Registro: 171653.)

La importancia de haberse acreditado en juicio que el pagaré se firmó en blanco estriba principalmente en evidenciarse que no contenía la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero —que es un elemento indispensable para la existencia de un pagaré y sin él, se carecería de ejecutividad, esto es así, porque la cantidad debe estar contenida en el título y esto conllevaría a una certeza jurídica— y en consecuencia a la obligación del pago.

Por eso, cuando se lleva a cabo la firma de un pagaré, las dos partes están aceptando las condiciones que en él constan y que son enunciadas en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es bajo esta aceptación que, por un lado, se constituye la declaración de pago del firmante y, por otro lado, el tenedor se compromete a hacer efectiva la suma plasmada en el documento a la persona que aparezca como tal o los que pudieran aparecer como futuros tenedores.

Lo que conlleva a que si el pagaré está en blanco en lo que concierne a la cantidad de dinero que esté en juego, primeramente, se incumpliría con el requisito en

Expediente Mercantil No. 00042020

cuestión y al no expresarse el monto, no se da por entendida la obligación que se contrajo a la firma del mismo; por ello, no se consideraría una relación entre el título y el derecho objeto del propio documento, pues no se encontraría determinada la obligación que de él deriva.

Ahora, si bien el demandado ofreció la **prueba pericial caligráfica, grafoscópica y en documentoscopia**, tal probanza se le declaró desierta el treinta de noviembre de dos mil veintitrés por falta de interés para su desahogo.

Y si bien contó con la prueba **confesional por posiciones** a cargo del actor desahogada el trece de noviembre de dos mil veintitrés, ésta no adquiere eficacia demostrativa plena en términos del artículo 1287 del Código de Comercio, pues no favoreció los intereses de su oferente, ya que el demandante negó que el pagaré se haya firmado en blanco y llenado con posterioridad en su contenido.

Lo anterior se advierte de las posiciones que fueron calificadas de legales y procedentes, mismas que se formularon de la manera siguiente:

"1. Si es cierto como lo es, que con todo el derecho que le asiste usted llenó los requisitos del pagaré que hoy reclama en esta demanda."

"2. Si es cierto como lo es, que con todo el derecho que le asiste usted llenó los espacios correspondientes del pagaré reclamado relativos al lugar y fecha de suscripción, lugar y fecha de pago, nombre del beneficiario e intereses."

"3. Si es cierto como lo es, que con todo el derecho que le asiste usted llenó los requisitos del pagaré reclamado en forma unilateral."

"4. Si es cierto como lo es, que con todo el derecho que le asiste usted llenó los requisitos del pagaré con posterioridad a la firma del mismo."

"5. Si es cierto como lo es, que el pagaré que hoy reclama se suscribió por el demandado estampando sólo la firma en el documento cuando éste se encontraba en blanco."

"6. Si es cierto como lo es, que el pagaré que hoy reclama se encontraba en blanco al momento de la celebración de la operación."

"7. Si es cierto como lo es, que el pagaré reclamado se encontraba en blanco al momento de firmar el mismo."

"8. Que si es cierto como lo es, que usted llenó los requisitos y datos del pagaré que hoy se reclama, con posterioridad a la firma del propio documento."

"9. Que si es cierto como lo es, que usted puso a la vista del demandado el documento reclamado para que lo firmara, el mismo se encontraba en blanco."

"10. Que si es cierto como lo es, que la cantidad que realmente le prestó al hoy demandado fue una cantidad muy inferior a la reclamada."

Respuestas otorgadas por el absolvente

“A la 1. No.”

“A la 2. No.”

“A la 3. No.”

“A la 4. No.”

“A la 5. No.”

“A la 6. Sí, se encontraba en blanco y lo llenamos entre los dos.”

“A la 7. No.”

“A la 8. No.”

“A la 9. No.”

“A la 10. No.”

Como es de observarse _____ negó que haya llenado los requisitos del pagaré que reclama en los espacios relativos al lugar y fecha de suscripción, lugar y fecha de pago, nombre del beneficiario e intereses de forma unilateral y con posterioridad a la firma del pagaré; asimismo, negó que el pagaré que hoy reclama se haya suscrito por el demandado estampando sólo la firma en el documento cuando éste se encontraba en blanco, aduciendo que si se encontraba en blanco y lo llenaron entre los dos, por lo que no estaba en blanco al momento de la firma; negó que al momento de poner ante la vista del demandado el pagaré para su firma este se encontrara en blanco y que se haya sido por una cantidad muy inferior a la reclamada.

Por otra parte, en el desahogo de la **prueba declaración de parte** a cargo del actor _____ —desahogada en los momentos inmediatos posteriores al desahogo de la confesional por posiciones—, tampoco favoreció los intereses del demandado, ya que éste no se contradijo con lo pactado en el pagaré base de la acción, esto al responder a las interrogantes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se formularon de la manera siguiente:

“1. Si usted ya le había otorgado al suscrito otros préstamos con anterioridad al que nos ocupa en este juicio.”

“2. Si considera usted que tiene derecho para demandar el presente juicio en contra del suscrito.”

“3. Si considera usted que tenía derecho para llenar los requisitos, datos y condiciones del pagaré reclamado, con posterioridad a la firma del mismo.”

"4. El motivo o razón por la que llenó los requisitos y elementos que debe contener el pagaré, con posterioridad a la firma del mismo."

"5. Si los requisitos y elementos que debe contener el pagaré, los llenó usted con anterioridad o con posterioridad a la firma del documento."

"6. Si la cantidad que realmente prestó usted al suscrito fue una cantidad inferior a la que se reclama en el presente."

Respuestas otorgadas por el actor:

"A la 1. Sí, ya le había prestado."

"A la 2. Sí, si tengo el derecho."

"A la 3. No."

"A la 4. No existen motivos, ya que se llenó entre los dos, primero de llenó la cantidad, luego la fecha y después se firmó."

"A la 5. Se llenó con anterioridad a la firma del documento."

"A la 6. No."

De la prueba en cuestión se obtiene que el actor admitió haber realizado otros prestamos al demandado con anterioridad al que nos ocupa; admitió contar con el derecho para demandar; que no considera tener el derecho para llenar los requisitos, datos y condiciones del pagaré reclamado, con posterioridad a la firma; que se llenó entre los dos, primero la cantidad, luego la fecha y después la firma y que la cantidad no fue inferior a la que reclama en el presente juicio.

Por tanto, al no haberse demostrado que el pagaré se firmó en blanco y llenado con posterioridad en su contenido, debe estarse a la literalidad del propio documento; y como ineludible consecuencia tampoco se demostró que no se obligó cambiariamente para con el actor.

Máxime que el demandado reconoce expresamente haber firmado voluntariamente en blanco; por ello al no acreditar con medio de prueba fehaciente que el documento basal fue llenado con posterioridad a la firma, se tiene a la literalidad del mismo, por lo que no excluye al demandado de la obligación que contrajo a la firma del título de crédito en los términos en el consignado.

En ese orden, la acción ejercitada en el particular se encuentra plenamente acreditada en autos, a partir de la exhibición a juicio del título de crédito base de la acción, el cual no fue desvirtuado en su contenido por la parte demandada, pues correspondía a éste y no al actor acreditar sus defensas y excepciones.

Además, es menester indicar que el pago o el cumplimiento de las obligaciones corresponde acreditarlo al suscriptor u obligado y no el incumplimiento al actor, acontecer que no se advierte haya acreditado el demandado, como se especificó en líneas precedentes.

Sustenta a lo aquí determinado, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes:

“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. *El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrado al obligado y no el incumplimiento al actor.*” (Sexta Época. Tercera Sala. Tesis Jurisprudencial 407. Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo V. Civil Primera Parte – SCJN Primera Sección - - Civil Subsección 2 - - Adjetivo. Página 419. Registro 1013006).

Máxime que la falta de pago se acredita —salvo prueba en contrario—, con la sola exhibición del documento base de la acción que hizo el demandante, pues en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el pago de un título de crédito debe hacerse precisamente contra su entrega, de lo que se colige que correspondía al demandado acreditar lo contrario, acontecer que se insiste, no se demostró en autos.

En ese sentido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391 (fracción IV) del Código de Comercio, los títulos de crédito —como lo es el pagaré de amarras— tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, por ende constituye una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la parte actora en el presente juicio, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena y, por lo mismo, es convincente de que tiene a su favor un crédito, por cantidad líquida, de plazo cumplido y exigible, de ahí que se estime procedente la acción cambiaria directa ejercitada en el presente juicio.

En esa guisa, no se entra al estudio y valoración de las pruebas aportadas por el actor, ya que no es en éste en quien recayó la carga de la prueba, además en nada variaría el sentido de la presente sentencia.

Bajo las consideraciones anteriores, al resultar procedente la acción cambiaria directa ejercitada por la parte actora, se **condena** al demandado

a pagar a favor de _____, la cantidad de **\$70,000.00** (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal.

Intereses moratorios.

Del documento base de la acción se desprende que las partes pactaron intereses moratorios a razón del **3%** (tres por ciento) mensual, esto es, el 36% (treinta y seis por ciento) anual desde que se encuentra en mora y hasta la total liquidación del adeudo.

No obstante, tales aspectos deben analizarse oficiosamente a efecto de evitar se actualice de la usura. Se expone:

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **350/2013**² sostuvo que las autoridades judiciales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho humano a la propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, lo que les faculta a efectuar el control de convencionalidad ex officio, aun ante la falta de petición de parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se adviertan indicios de un interés desproporcionado y excesivo, se debe analizar de oficio la posible configuración de la usura.

Asimismo, que de la interpretación del artículo 174 (párrafo segundo) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, se desprende que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pero sobre la base de que tal permisión no es de carácter ilimitado, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

De igual manera, señaló la relevancia de dejar establecido, como parte del alcance normativo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que los intereses libremente fijados en un pagaré legalmente no pueden provocar que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, por lo que el Juez

² Contradicción de tesis de las que surgieron las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014, cuyos rubros –respectivamente– son: “**PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCION DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].**” IUS 2006794 y “**PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.**” IUS 2006795.

que conozca de cada caso debe preservar de oficio que no ocurra el fenómeno usurario.

Es decir, que tal precepto, aunque permite que las partes que suscriben un pagaré fijen los intereses libremente, la exigencia constitucional y convencional en materia de derechos humanos prohíbe que, con ello, una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

De manera que, se dijo, el Juzgador que resuelva la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el Juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente excesivo o usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver.

Del mismo modo, sostuvo que el Juzgador está constreñido a que, solamente si aprecia en las constancias de autos elementos suficientes para generarle convicción de lo notoriamente excesivo de la tasa de interés, debe oficiosamente reducir la tasa para que quede dentro del margen por debajo de lo que sea notoriamente desmedido, mediante un ejercicio de justificación; conceptualizando que lo “*notoriamente excesivo*” se refiere a la sola apreciación de las constancias de autos que se tengan a la vista, que generen convicción de lo usurario del interés, sin recabar mayores elementos de prueba.

Ese análisis, se precisó, debe ceñirse a los parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter excesivo de los intereses, cuando en actuaciones obre prueba válida de ellas. Lo anterior, también se dijo, que debería complementarse con la evaluación del elemento subjetivo, esto es, la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor con relación al acreedor, cuya presencia influenciará en el aumento o disminución de lo estricto de la calificación de la usura.

Por lo que puntualizó, corresponderá al Juzgador que conozca la litis relacionada con el reclamo del pago de los intereses pactados en el pagaré, la atribución de acoger de oficio para la condena la tasa pactada, pero sólo si mediante su aplicación, y acorde con las circunstancias particulares y propias del caso concreto controvertido y de los elementos que obren en autos, no provoque que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

Bajo esas premisas, este tribunal aplicará de oficio el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en el caso en concreto, para que dicho numeral, de ser el caso, no sirva de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios.

En el entendido de que si este Tribunal no adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses fijado en el pagaré base de la acción es notoriamente excesivo o usurario acorde con las circunstancias particulares del presente caso, las constancias de actuaciones, así como de los hechos notorios, entonces dejará intocada la estipulación que sobre intereses realizaron las partes en el pagaré base de la acción; empero, de ocurrir lo contrario, esto es, que se adquiriera convicción de que el pacto de intereses es notoriamente excesivo, entonces se procederá, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido de los intereses pactados por las partes, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés que deberá ser reducida prudencialmente para que no resulte excesiva; lo cual se realiza en los términos subsiguientes:

El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, en este sentido, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios.

La determinación que antecede tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 54/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes:

“USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios,

*los que si bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios.” (Décima Época. Primera Sala. Tesis **Jurisprudencial** 1a./J. 54/2016 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36. Noviembre de 2016. Tomo II. Página 883. Registro 2013076).*

Ahora, en relación con la anterior labor que debe llevar a cabo de oficio el Juzgador que conozca del juicio respectivo, tal como ya se refirió con anterioridad, el Máximo Tribunal del País al resolver la multicitada contradicción de tesis **350/2013**, determinó que constituyen parámetros guía para evaluar **objetivamente** el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, si de las constancias de actuaciones o como hecho notorio, se aprecian los elementos de convicción respectivos, los cuales resultan ser los siguientes:

- a) El tipo de relación existente entre las partes;
- b) Calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si es que la actividad del acreedor se encuentra regulada;
- c) Destino o finalidad del crédito;
- d) Monto del crédito;
- e) Plazo del crédito;
- f) Existencia de garantías para el pago del crédito;
- g) Tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a la que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;
- h) La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;
- i) Las condiciones del mercado;
- j) Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.

Asimismo, estableció que la anterior evaluación debe complementarse con el análisis del elemento **subjetivo** a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

Así, el criterio **objetivo** parte de un límite fijo, aplicable a la generalidad de los casos, éste, a su vez, puede ser absoluto, cuando en la norma se establece un margen concreto, una tasa determinada; o puede ser relativo, cuando dicho límite puede variar, atendiendo a las condiciones existentes en el mercado o las tasas del sistema financiero, por mencionar algunos ejemplos.

En tanto, el criterio **subjetivo**, por su parte, involucra conceptos sujetos a interpretación, permite al Juzgador un ejercicio más libre de su arbitrio judicial, a partir de las circunstancias especiales de cada caso en particular.

Lo anterior, en el entendido de que no es necesario que exista prueba sobre todos y cada uno de los parámetros de evaluación enunciados en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el propio criterio obligatorio en comento, se establece que el exceso del interés debe ponderarse conforme a las circunstancias particulares del caso, las constancias de actuaciones, así como de los hechos notorios, considerando los parámetros objetivos expresamente señalados y otros que generen convicción en el Juzgador; es decir, la jurisprudencia de mérito reconoce que los parámetros enlistados no son un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyo número y combinación puede variar de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Precisado lo anterior, en la especie, conforme a los parámetros guía para evaluar **objetivamente** el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés, acorde con las circunstancias particulares del presente caso, las constancias de actuaciones, así como de los hechos notorios, se aprecian los elementos siguientes:

1. El tipo de relación existente entre las partes.

Las partes en el juicio son el actor **Compañía de Seguros y Fianzas de México, S.A. de C.V.**, personas físicas, respecto de la cual no se advierte que se dedique a alguna actividad crediticia sujeta a regulación, como ocurre con una institución financiera; y, el demandado **Compañía de Seguros y Fianzas de México, S.A. de C.V.** es persona física.

2. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada.

La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré son **Compañía de Seguros y Fianzas de México, S.A. de C.V.** —como acreedor o beneficiario del título de crédito (pagaré)— y **Compañía de Seguros y Fianzas de México, S.A. de C.V.** —como deudor u obligado—, sin que se desprenda de autos que la actividad del acreedor se encuentre regulada, esto es, como prestamista.

3. El destino o finalidad del crédito.

No se desprende cuál sería el destino o finalidad del crédito otorgado a la parte demandada, pues en el caso concreto, la procedencia de la acción parte de la hipótesis que el documento base goza de autonomía y abstracción.

4. El monto del crédito.

Lo es por la suma de \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

5. El plazo del crédito.

El plazo del crédito otorgado es de **un mes** —del ocho de junio de dos mil veintidós al ocho de julio de dos mil veintidós—.

Al respecto, no pasa desapercibido que un crédito a corto plazo normalmente implica pagos más elevados y uno a largo plazo implica pagos más pequeños, pero por un tiempo mayor, de manera que generalmente los créditos resultan ser más costosos cuando su plazo es mayor y viceversa.

En esa medida, se tiene que el crédito otorgado a través del pagaré básico de la acción fue de corto plazo —un mes—, ello en comparación a los usos y costumbres mercantiles de los que se puede deducir que la vida de un crédito habitualmente es mayor al plazo del crédito concedido en el documento base del presente negocio, por lo que se considera que el crédito otorgado a los demandados no resultaba ser tan costoso para la parte acreditada.

6. La existencia de garantías para el pago del crédito.

En el presente negocio no se advierte que los acreditados hubiesen otorgado algún tipo de garantía a favor de su acreedor para el cumplimiento de su obligación de pago.

7. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia.

En el caso se considera que las tasas de las operaciones bancarias con mayor similitud a las que se analizan derivadas del pagaré son las

de tarjetas de crédito, en función del tipo de operación económica que se lleva a cabo en una y otra.

Lo anterior, en tanto que ambos instrumentos tienen una intrínseca relación, tan es así, que Luis Manuel Villavicencio, en su obra *“Teoría del Crédito Bancario”* alude a ambas figuras en la definición de tarjeta de crédito: *“Es una laminilla de plástico grabada con los datos de una persona que tiene derecho a recibir de otras personas físicas o morales, mercancías o servicios a la presentación y mediante la firma de pagarés a la orden de quien expidió la laminilla”*.

Además, ambos instrumentos se encuentran vinculados en el orden jurídico, pues la circular 29/2008 emitida por el Banco de México, que contiene las *“Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito”*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil ocho, entre otras cuestiones destacadas, en su disposición general 2.6, inciso a), punto i), dispone:

“2.6 La Emisora podrá efectuar cargos en la Cuenta por el importe de los pagos de bienes, servicios, contribuciones, domiciliaciones y disposiciones de efectivo, que el Tarjetahabiente autorice conforme a lo siguiente:

a) En operaciones en las que el Tarjetahabiente presente la Tarjeta de Crédito en el Establecimiento, a través de:

i) La suscripción de pagarés u otros documentos,”

Nota. Lo resaltado es propio de esta sentencia.

Aunado a las anteriores consideraciones que, básicamente, revelan que las transacciones efectuadas por medio de tarjeta de crédito se pueden documentar con un pagaré, ya sea firmado de manera autógrafa o electrónicamente con el número de identificación personal comúnmente conocido como NIP —tal como se realiza en la práctica al realizar las operaciones por teléfono o a través de la página electrónica en la red mundial (internet)— debe destacarse que ambos documentos comparten las siguientes características adicionales: en los dos casos se trata de préstamos personales, la materia del mismo es dinero y no existe garantía prendaria o hipotecaria para respaldarlo, por lo que el riesgo asumido por el acreedor al entregar la suma consignada en el pagaré base de la acción, se equipara al que se asume al emitir una tarjeta de crédito una institución bancaria; tasa que el Banco de México estima adecuada para retribuir al acreedor de una ganancia lícita.

Una vez justificada la idoneidad de tomar como un parámetro las tasas de interés de tarjetas de crédito, con base en el inciso “g” de la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.) en comentario, que señala como tal *“las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan”*, no se soslaya que, de

acuerdo con el Banco de México, se conoce como cliente “totalero” al que paga el saldo de la tarjeta de crédito cada mes y como “no totalero” al que no lo hace así.

En ese sentido, debido a que los demandados incumplieron con el pago deben considerarse, por analogía, como clientes “no totaleros”.

Hecho lo anterior, se determina que al ser el documento base un título de crédito, genera certidumbre emplear como referente la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes “no totaleros”, que son los que pagan intereses por no cubrir el saldo total determinado en el estado de cuenta respectivo por el uso de la tarjeta de crédito.

Así, debe tomarse como base la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP), que reporte el valor más alto para las tarjetas de crédito y cercano a la fecha en que se hizo exigible –nueve de julio de dos mil veintidós–³.

Por otra parte, por lo que respecta a las tarjetas de crédito –operación similar al pagaré– se tiene que los Indicadores básicos de tarjetas de crédito no son publicados por el Banco de México, mes por mes, sino por periodos, por lo que los datos que se tomarán en el presente asunto son los que datan hasta el mes de **diciembre de dos mil veintidós**, al ser la fecha más próxima a la fecha en que se hizo exigible la acción –nueve de julio de dos mil veintidós–.

En ese orden, los indicadores básicos de tarjeta de crédito, con datos a junio de dos mil diecinueve, publicados por el Banco de México, resultan ser los siguientes:

| Cuadro 5 | | | | | | |
|--|----------------------------|--------|---|---------|--|--------|
| Información básica para la clientela no-totalera | | | | | | |
| | Número de tarjetas (miles) | | Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) | | Tasa efectiva promedio ponderado por saldo (%) | |
| | Dic-21 | Dic-22 | Dic-21 | Dic-22 | Dic-21 | Dic-22 |
| Sistema | 7,504 | 8,888 | 211,177 | 250,230 | 32.9 | 36.1 |
| Banregio | 51 | 74 | 1,439 | 2,170 | 23.5 | 28.9 |
| HSBC | 449 | 497 | 13,317 | 17,874 | 29.3 | 29.3 |
| Invex | 134 | 161 | 4,437 | 6,636 | 34.8 | 31.5 |
| Citibanamex | 1,411 | 1,587 | 51,668 | 60,012 | 28.9 | 31.9 |
| BBVA | 2,158 | 2,468 | 60,528 | 65,410 | 31.1 | 34.3 |
| Banorte | 730 | 895 | 26,394 | 31,479 | 33.4 | 36.9 |
| Santander | 929 | 1,203 | 34,180 | 42,538 | 34.7 | 38.3 |
| Scotiabank | 195 | 188 | 5,694 | 6,012 | 41.7 | 44.9 |
| Inbursa | 382 | 331 | 6,042 | 6,169 | 47.1 | 49.5 |
| BanCoppel | 778 | 1,124 | 4,429 | 7,409 | 58.9 | 58.7 |
| Banco Azteca | 252 | 317 | 2,182 | 3,408 | 49.8 | 63.8 |
| Instituciones con menos de cien mil tarjetas totales | | | | | | |
| Banco del Bajío | 16 | 20 | 415 | 573 | 36.9 | 40.1 |
| Banca Afirme | 17 | 21 | 383 | 480 | 41.8 | 52.8 |

³ Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro: “USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMP PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVA AL EXAMEN DE AQUÉLLA.” IUS 2018865.

Información que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles –supletorio del Código de Comercio–, misma que se obtiene del portal de internet del Banco de México, sitio oficial de divulgación que tiene el propósito de fomentar una mayor cultura económica y financiera entre la población. Además, en términos del artículo 62 (fracción I) de la Ley del Banco de México, el Banco de México está facultado para que en coordinación con las demás autoridades competentes, elabore, compile y publique estadísticas económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en ellas y recabar los datos necesarios para esos efectos; motivo por el que dicha información hace prueba plena, dado que la misma proviene de un organismo público que, en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publica, entre otros, los Indicadores básicos de tarjeta de crédito.

Así, se obtiene que el promedio de la Tasa Efectiva Promedio Ponderada más alta era del **63.8% (sesenta y tres punto ocho por ciento)** anual, correspondiente a la institución bancaria Banco Azteca⁴.

Por lo que, a la luz de la cifra anterior, así como del resto de los parámetros objetivos y subjetivos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá determinar si los intereses pactados en el documento fundatorio de la acción son notoriamente excesivos o no.

8. La variación del índice inflacionario nacional.

Al respecto se tiene que durante la vida real del crédito otorgado a través del pagaré fundatorio de la acción –desde la fecha de suscripción el ocho de junio de dos mil veintidós al ocho de julio de dos mil veintidós– fue de **0.74%**⁵.

9. En cuanto a las condiciones del mercado.

Con relación a este aspecto objetivo, se estima conveniente remitirse al punto 7 que precede, en tanto que dicho elemento es revelador de las condiciones del mercado que operan para operaciones similares a la del título de crédito base de la acción.

⁴ USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE A LA TASA DE INTERÉS EFETIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USUARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADO POR PERSONAS FISICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MAS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. (Undécima Época. Jurisprudencia, instancia primera sala. Semanario Judicial de la Federación. Registro 2026316. Tesis: 1a./J.2/2023(11a.).

⁵ Consulta del porcentaje de variación del índice inflacionario nacional, hecha en <https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx>

10. En cuanto a diversas cuestiones que pudiesen generar convicción.

Al respecto se tiene que acorde con las circunstancias particulares del presente caso, las constancias de actuaciones, así como de los hechos notorios, no se desprende alguna otra a las ya analizadas.

En otra línea, en cuanto al análisis del elemento **subjetivo** a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor, se tiene en el particular que tal elemento no se acredita, pues no se advierte que, a la demandada se le hubiese colocado en una situación vulnerable o de desventaja frente al actor.

Con base en lo anterior, tras analizar de manera conjunta los parámetros **objetivos y subjetivos** establecidos con anterioridad, acorde con las circunstancias particulares del presente juicio, las constancias de actuaciones, así como de los hechos notorios, se estima que los intereses moratorios pactados en el título de crédito base de la acción, a razón del **3%** (tres por ciento) mensual **–36% anual–**, **no son excesivos ni usurarios**, pues tales intereses son inferiores al promedio de la Tasa Efectiva Promedio Ponderada de los indicadores bancarios que se dijo era del **63.8%** (**sesenta y tres punto ocho por ciento**) anual.

Así, conforme a los razonamientos jurídicos precisados con anterioridad, se determina que la tasa de **intereses moratorios** que deberá cubrir la parte demandada al actor será la del **36% (treinta y seis por ciento) anual** sobre la suerte principal, generados a partir del día siguiente del vencimiento del pagaré base de la acción, esto es, a partir del **nueve de julio de dos mil veintidós** y demás que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, previa regulación que se realice en la vía incidental.

IX. Gastos y costas.

Al haberse acreditado la acción cambiaria directa del presente juicio, hace que se actualice la fracción III, del artículo 1084 del Código de Comercio que determina la condenación forzosa en costas para *“el que fuese condenado en juicio ejecutivo mercantil y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable”*.

Por lo que en base a tal disposición se **condena** al demandado
a pagar al actor los gastos y
costas que haya erogado en esta instancia con motivo de la tramitación del presente
juicio, previa su legal liquidación en la vía incidental.

Al respecto, son aplicables las jurisprudencias de rubros y textos siguientes:

“COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. Cuando a causa de la apelación interpuesta por el demandado se revoca la sentencia condenatoria del a quo y se absuelve de la acción ejecutiva mercantil ejercitada en contra de aquél, procede la condenación en costas del accionante solamente por la primera instancia, en virtud de que se surte la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, que determina la condenación forzosa en costas para “el que fuere condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable...”, sin importar que no fuere el actor condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, pues tal circunstancia únicamente se debe observar para la segunda instancia, conforme lo dispone la fracción IV del invocado precepto, que en la especie, se traduce, que al no actualizarse dicho requisito, implica que no pueda condenarse al perdedor del conflicto por las costas de la segunda instancia.” (Novena Época. Tesis: 1a./J. 29/96. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Diciembre de 1996, página 117. Registro: 199802.)

“COSTAS EN JUICIOS MERCANTILES. La fracción III, del artículo 1084, del Código de Comercio, dispone como imperativo legal que siempre será condenado en costas el que fuese vencido en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtuviese sentencia favorable, razón por la cual, aunque no se hubiese formulado petición al respecto por su contraria, el Juez de oficio debe imponer esa sanción pues con estricto apego al principio de equidad, la sola circunstancia de no haberse acreditado la procedencia de la acción ejercida en su contra, le debe generar el derecho a que le sean cubiertas. Lo anterior, en razón de que la materia de costas mercantiles, además de constituir una excepción al principio dispositivo que rige a las diversas etapas procesales que conforman a esta clase de controversias judiciales, también se rige por el sistema compensatorio o indemnización obligatoria al así encontrarse previsto expresamente en la ley, pues lo que se persigue por el legislador es el resarcir de las molestias, erogaciones y perjuicios ocasionados a quien injustificadamente hubiese sido llamado a contender ante el órgano jurisdiccional.” (Novena Época. Tesis: 1a./J. 47/99. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Octubre de 1999, página 78. Registro: 193144).

X. Ejecución.

Para el caso de que la parte demandada no dé cumplimiento voluntario a la presente sentencia dentro del término de **tres días** siguientes a aquel en que la misma cause estado, hágase trance y remate de los bienes embargados o que se lleguen a embargar y, con su producto, efectúese el pago a la parte actora de las prestaciones condenadas, lo anterior de conformidad con los artículos 1079 (fracción VI) y 1408 del Código de Comercio.

Por lo expuesto y fundado, **SE RESUELVE:**

PRIMERO. Este tribunal fue competente para conocer y decidir del presente juicio, así como correcta fue la vía elegida por el demandante, ello de conformidad con los considerandos I y II, respectivamente.

SEGUNDO. La parte actora acreditó plenamente los extremos de la acción cambiaria directa, según lo exteriorizado en el considerativo VIII; en consecuencia:

TERCERO. Se **condena** al demandado _____ a pagar a favor de _____, la cantidad de **\$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**, por concepto de suerte principal.

CUARTO. Se **condena** al demandado _____ a pagar a favor del actor _____, los **intereses moratorios** a razón de la tasa del **36% (treinta y seis por ciento) anual** sobre la suerte principal, generados a partir del día siguiente del vencimiento del pagaré base de la acción, esto es, a partir del **nueve de julio de dos mil veintidós** y demás que se sigan causando hasta la total solución del adeudo, previa regulación que se realice en la vía incidental.

QUINTO. Por las consideraciones vertidas en el considerando **IX**, se **condena** al demandado _____ a pagar al actor _____ los gastos y costas que haya erogado en esta instancia con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su legal liquidación en la vía incidental.

SEXTO. Para el caso de que la parte demandada no dé cumplimiento voluntario a la presente sentencia dentro del término de **tres días** siguientes a aquel en que la misma cause estado, hágase trance y remate de los bienes embargados o que se lleguen a embargar y, con su producto, efectúese el pago a la parte actora de las prestaciones condenadas, de conformidad con lo precitado en el considerando **X**.

Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma **Francisco Crispín Borbón Mendoza**, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, por ante **Ilse Maritza Molina Beltrán**, Secretaria Segunda de Acuerdos, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.

(dos firmas ilegibles)

Lista. El _____ de marzo de dos mil veinticuatro se publicó en lista de acuerdos la presente sentencia. Conste.

dgfh